EXPEDIENTE No.: *****
QUEJOSA: QV1
RESOLUCIÓN: RECOMENDACIÓN
50/2014
AUTORIDAD
DESTINATARIA: PROCURADURÍA GENERAL DE
JUSTICIA DEL ESTADO DE
SINALOA

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 25 de noviembre de 2014

LIC. MARCO ANTONIO HIGUERA GÓMEZ,
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa (CEDH), de conformidad con lo dispuesto por los artículos 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º; 2º; 3º; 4º Bis, 4º Bis C y 77 Bis de la Constitución Política del Estado; 1º; 3º; 7º, fracciones I, II y III; 16, fracción IX; 27, fracción VII; 55; 57; 58 y 64 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; así como 1º; 4º; 77, párrafo cuarto; 94; 95; 96; 97; 99 y 100 de su Reglamento Interno, ha examinado los elementos existentes dentro del expediente número ***** , que derivó de la queja presentada por la señora QV1, mismos que atribuyó a personal de la agencia primera del Ministerio Público del fuero común de ****, Sinaloa, Sinaloa, y en atención a la competencia de este organismo, ha resuelto en el expediente en que se actúa basado en los siguientes:

I. HECHOS

Que el día 8 de mayo de 2013, la señora QV1 presentó escrito de queja ante este Organismo Estatal a través del cual denunció hechos violatorios a derechos humanos cometidos en su perjuicio, los cuales hizo consistir en que el día 1º de septiembre de 2012, elementos de la Policía Ministerial del Estado realizaron un operativo en **** correspondiente a ****, municipio de Sinaloa, Sinaloa, quienes se introdujeron a su domicilio causándole daños y sustrayendo objetos de valor, presentando la denuncia ante la agencia segunda del Ministerio Público del fuero común de ese lugar sin realizar investigación alguna sobre los mismos.

Igualmente agregó que elementos de dicha corporación policiaca en fecha 7 de mayo de 2013 se volvieron a introducir a su domicilio causando daños en su vivienda e inmuebles, logrando identificar números de las unidades oficiales, siendo éstos ****, ****, ****, **** y una unidad tipo ****.

II. EVIDENCIAS

En el presente caso las constituyen:

1. Queja presentada ante esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos por la señora Q1 de fecha 5 de mayo de 2013.

2. Con oficio número **** de fecha 10 de mayo de 2013, se solicitó información sobre los hechos al Director de la Policía Ministerial del Estado, así también se le cuestionó si las patrullas marcadas con los números ****, ****, *** y **** pertenecían a dicha corporación policíaca.

3. Oficio número **** de fecha 10 de mayo de 2013, por el cual se solicitó información sobre los hechos al agente segundo del Ministerio Público del fuero común de Sinaloa, Sinaloa.

4. Acta circunstanciada de fecha 13 de mayo de 2013, donde se hizo constar llamada telefónica de la señora V1, quien hizo del conocimiento a personal de este Organismo Estatal que el día de la fecha, aproximadamente a las 11:30 horas, elementos de la Policía Ministerial del Estado volvieron a introducirse a su domicilio ocasionando daños materiales.

5. Acta circunstanciada de fecha 16 de mayo de 2013, donde se hizo constar la presencia de la agraviada en las instalaciones de las oficinas regionales de esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, donde narró los hechos de que fue objeto por parte de elementos de dicha corporación policíaca, ofreciendo como prueba de los daños ocasionados en el interior de su domicilio, constando de 9 (nueve) fotografías a color, además de hacer del conocimiento que el número de la patrulla que se introdujo era el ****.

6. Con oficio número **** de fecha 20 de mayo de 2013, se recibió la información solicitada a la agencia del Ministerio Público del fuero común de ****, Sinaloa, Sinaloa, en el que informa que en fecha 12 de septiembre de 2012 inició la averiguación previa 1 con motivo de los hechos que la agraviada refiere en su escrito de queja.

Igualmente agregó que la fecha de la última diligencia realizada dentro de la indagatoria penal citada es de 29 de enero de 2013.

7. Con oficio número **** de fecha 24 de mayo de 2013, se recibió la información por parte del Director de la Policía Ministerial del Estado, quien manifestó que si bien las patrullas identificadas por la quejosa con los números ****, ****, **** y **** son de uso oficial de esa corporación policíaca, pero que personal de su mando no participó en los hechos denunciados.

8. En fecha 30 de mayo de 2013, se recibió testimonio a la menor M1

debidamente acompañada de N1, quien dijo presenciar los hechos que narra la quejosa, ya que al momento de que éstos ocurrieron se encontraba en la casa al lado del domicilio de la señora Q1.

Agregó además que a la casa de su tía no es la primera ocasión en que se introducen y cada vez que van, revisan los vehículos y les piden documentos.

9. Con fecha 30 de mayo de 2013, se recibió el testimonio de N1, quien manifestó que el 7 de mayo de ese año, se percató que entraron a **** de ****, Sinaloa, varias patrullas de Policía Ministerial del Estado causando destrozos en varias casas.

Añadió que aproximadamente a las dos de la tarde se percató que ya iban de salida y que llevaban en una de las unidades oficiales una moto y que se le hizo conocida, que se parecía a la que tiene su vecina, esto es, la agraviada Q1, sin hacer mayores comentarios.

Así también manifestó que por la tarde le comentó a la mamá de la agraviada lo que había visto, quien le dijo que esa motocicleta era de ella, invitándola a pasar a su domicilio, percatándose que había mucho destrozo, incluyendo la comida que estaba tirada en el piso, vidrios rotos, la sala destrozada.

10. Acta circunstanciada de fecha 16 de agosto de 2013, en la que se hizo constar llamada telefónica de la agraviada con personal de este Organismo Estatal, donde manifestó que en el momento de la llamada telefónica, que serían aproximadamente las 10:00 horas, se encontraban los elementos de Policía Ministerial del Estado en su domicilio causando destrozos.

En esta tercera ocasión que fue objeto de molestia, refirió que el operativo lo conformaban varias unidades oficiales y una unidad aérea.

11. Con oficio número **** de fecha 16 de agosto de 2013, se solicitó información sobre los hechos al Encargado de la Partida de la Policía Ministerial del Estado, particularmente sobre los hechos que denunció la agraviada en esa misma fecha.

12. Con oficio número **** de fecha 19 de agosto de 2013, se recibió la información solicitada al encargado de dicha corporación policiaca quien manifestó que elementos de la comandancia a su cargo no participaron en operativo alguno, por lo que desconoce los hechos denunciados por la quejosa.

13. Con oficio número **** de fecha 20 de agosto de 2013, se solicitó información sobre la problemática planteada por la quejosa al Director de Policía Ministerial del Estado, particularmente sobre los hechos que denunció la agraviada en fecha 16 del mismo mes y año.

14. Con oficio número **** de fecha 20 de agosto de 2013, se solicitó información sobre los hechos al Encargado de la Dirección de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

15. Acta circunstanciada de fecha 26 de agosto de 2013, en la que se hizo constar la comparecencia de la agraviada en las oficinas que ocupa la Visitaduría Regional Zona Guasave de este Organismo Estatal, con el propósito de hacer entrega de 38 fotografías, de las cuales refirió que dos de ellas fueron tomadas a un helicóptero que sobrevolaba por la zona el día 16 de agosto de 2013, fecha en que elementos de la Policía Ministerial del Estado se introdujeron nuevamente a su domicilio y que posteriormente lo incendiaran.

16. Acta circunstanciada de fecha 26 de agosto de 2013, en la que se hizo constar la comparecencia de N2, agregando que el día en se actúa de la fecha, aproximadamente a las 09:00 horas, salió de su domicilio particular ubicado en el ****, ****, Sinaloa, con rumbo a Guasave, advirtiendo que 4 patrullas de Policía Ministerial del Estado se encontraban en casa de su prima QV1, recabando los números oficiales ****, ****, **** y ****.

La información de referencia la proporcionó con el propósito de agregarla a la investigación del expediente de mérito.

17. Con oficio número **** de fecha 27 de agosto de 2013, se solicitó información al agente segundo del Ministerio Público del fuero común de ****, Sinaloa, respecto los avances realizados dentro de la averiguación previa 1 iniciada con motivo de los hechos denunciados por la agraviada ante esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

18. Con oficio número **** de fecha 26 de agosto de 2013 y entregado en este Organismo Estatal el 28 siguiente, se recibió la información por parte del Director de la Policía Ministerial del Estado, en el que manifestó que esa Dirección de su cargo no tuvo conocimiento de manera oficial de las conductas referidas por la agraviada.

19. Con oficio número **** de fecha 18 de septiembre de 2013, se recibió la información solicitada al agente del Ministerio Público del fuero común de ****, Sinaloa, informando a la fecha que la última actuación practicada dentro de la averiguación previa 1 es de fecha 29 de enero de 2013 y corresponde a un oficio de investigación remitido al Director de Policía Ministerial del Estado.

III. SITUACIÓN JURÍDICA

Con fecha 8 de mayo de 2013, la señora QV1 presentó escrito de queja en contra

de elementos de la Policía Ministerial del Estado, por el allanamiento de que fue objeto en su domicilio particular y los daños ocasionados al interior del mismo.

De los hechos fue objeto de molestia en tres ocasiones, siendo éstas en fecha 1º de septiembre de 2012, 14 de mayo de 2013 y 16 de agosto de 2013, siendo en esta última fecha que no sólo fue el allanamiento de morada, sino que también su domicilio fue incendiado.

Lo anterior lo hizo del conocimiento al agente del Ministerio Público del fuero común en ****, Sinaloa, dando inicio a la averiguación previa 1 en fecha 12 de septiembre de 2012.

Cabe señalar que no se lograron reunir los elementos suficientes para determinar la presunta violación a derechos humanos por parte de la agraviada atribuidos a elementos de la Policía Ministerial del Estado, no obstante lo anterior, no implica que no se hubiesen realizado, ya que los daños que le fueron ocasionados quedaron descritos mediante impresiones fotográficas.

Lo que sí quedó debidamente acreditado y documentado es la falta de investigación por parte del agente del Ministerio Público del fuero común Encargado del Despacho de ****, Sinaloa, y de la información que se encuentra agregada en el expediente de queja y proporcionada por el titular de la citada agencia social se advierten que las únicas actuaciones que llevó a cabo dentro de la indagatoria penal correspondiente fueron las que a continuación se enlistan.

1. El acuerdo de inicio de la averiguación previa de fecha 12 de septiembre de 2012;
2. Oficio de investigación girado al Director de Policía Ministerial del Estado de fecha 12 de septiembre de 2012;
3. Declaración ministerial de cuatro personas como testigos de fecha 19 de septiembre de 2012;
4. El dictamen de evaluación de daños del domicilio de la agraviada, y
5. Oficio de solicitud de informe girado al Director de Policía Ministerial del Estado de fecha 29 de enero de 2013.

Con posterioridad, esto es, en fecha 18 de septiembre de 2013, con oficio número **** de fecha 27 de agosto de 2013, esta CEDH solicitó al agente tercero del Ministerio Público del fuero común de ****, Sinaloa, un informe en el que señalara, entre otras cosas, el estado actual de la averiguación previa 1 y, de encontrarse en trámite, mencionara las diligencias practicadas con posterioridad a la fecha 20 de mayo de 2013, así como las derivadas de los hechos ocurridos el

día 16 de agosto del mismo año.

Como respuesta a dicha solicitud, el agente social informó que la fecha de la última diligencia era de fecha 29 de enero de 2013 y respecto los hechos ocurridos el día 16 de agosto de 2013 no tenía conocimiento de los mismos, en consecuencia no había diligencia al respecto.

IV. OBSERVACIONES

Que en razón de que los actos motivo de la queja fueron atribuidos a servidores públicos de la agencia del Ministerio Público del fuero común en ****, Sinaloa, por lo que, de conformidad con lo estatuido por los artículos 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 Bis de la Constitución Política del Estado; 1º; 2º; 3º; 5º; 7º; 27; 28; 39; 40; 45; 46; 47; 52; 53 y demás relativos de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, este Organismo Estatal es competente para conocer y resolver de la queja presentada por la señora QV1, por hechos violatorios de derechos humanos cometidos en su perjuicio.

Así las cosas, previo al análisis particular de cada hecho violatorio, es pertinente señalar que en un régimen constitucional como el nuestro, la valoración jurídica del proceder de un servidor público debe hacerse a partir de lo que la ley fundamental estatuye en cuanto a su competencia, análisis que debe ser complementado con lo que la legislación secundaria prevenga con relación a sus atribuciones, razón por la cual más adelante, en forma sucesiva, examinaremos los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los diferentes cuerpos normativos de la legislación secundaria que regulan el actuar de dicho servidor público señalado como responsable.

En este entendido, y expuesto el régimen jurídico que regula los aspectos relativos a la queja presentada por la señora QV1, dado que el agente del Ministerio Público del fuero común en ****, Sinaloa, transgredió el derecho humano a la legalidad con motivo de la dilación en la completa integración de la averiguación previa 1, esto en razón de las siguientes consideraciones:

DERECHO HUMANO VIOLENTADO: Derecho a la legalidad y de acceso a la justicia

HECHO VIOLATORIO ACREDITADO: Dilación en la integración de la averiguación previa

Al partir de las evidencias que conforman el expediente de mérito, esta Comisión pudo acreditar violación al derecho humano a la legalidad, traducidos en la irregular integración de la averiguación previa 1, que conduce primordialmente a la dilación en la integración de dicha investigación penal, en razón de las siguientes consideraciones:

Del análisis de las evidencias que obran en el expediente de mérito, esta Comisión

Estatal de los Derechos Humanos advierte la falta de actuación del agente del Ministerio Público del fuero común de ****, Sinaloa, por lo que resulta importante establecer que el derecho a la legalidad se define como aquellos actos de la administración pública y de la administración y procuración de justicia que se realizan, deben llevarse a cabo con apego a lo establecido por el orden jurídico a efecto de evitar que se produzcan perjuicios indebidos en contra de sus titulares.

De igual forma, la irregular integración de la averiguación previa consiste en la abstención injustificada de practicar las diligencias debidas para acreditar el cuerpo del delito o la probable responsabilidad del inculpado, o en el abandono o desatención de la función investigadora de los delitos una vez iniciada la averiguación previa.

Así pues, de las evidencias enlistadas con anterioridad en el capítulo del mismo título, se advierte que a la fecha en que la presente resolución es emitida se llevaron a cabo solamente cinco actuaciones por parte del representante social.

Lo anterior se reafirma además con una segunda solicitud de informe que se realizó al agente social reiterando que la diligencia realizada dentro de la indagatoria penal es de fecha 29 de enero de 2013, siendo ésta un oficio de solicitud de investigación girado al Director de Policía Ministerial del Estado, razón por la que con base en los argumentos ya señalados en el cuerpo de la presente Recomendación, se tiene por cierto lo denunciado por la quejosa; es decir, que el agente del Ministerio Público no ha llevado a cabo las diligencias necesarias para lograr la completa integración de la averiguación previa 1.

Es de reprocharse entonces al representante social, licenciado AR1, por las omisiones incurridas en la integración de la averiguación previa en cita, particularmente en cuanto a su obligación de llevar a cabo las acciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

Al respecto y ante tal omisión, válidamente puede presumirse que dicha indagatoria está siendo integrada de forma irregular y/o deficiente, porque no se están llevando a cabo las acciones necesarias para lograr la completa integración de la misma.

Lo anterior denota la falta de interés del personal de la citada agencia de realizar las diligencias necesarias para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, así como de llegar a la verdad de los hechos, generando de esta forma una irregular integración de la averiguación previa 1; lo que a su vez deriva en dilación durante la integración de dicha averiguación, ya que la misma data de 12 de septiembre de 2012, sin que hasta la fecha en que la presente resolución se emite se tenga conocimiento que haya sido resuelta.

Esto trae como consecuencia que a la quejosa no se le administre justicia de forma

pronta, a lo cual tiene derecho de acuerdo al segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, asimismo, con su omisión el personal de la citada agencia incumplió con su obligación de evitar el rezago en las averiguaciones previas que estén integrando, la cual se encuentra enunciada en la fracción I del artículo 18 de la Ley Estatal de Seguridad Pública del Estado.

Sobre este hecho violatorio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado al sostener la necesidad de que las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia respeten un plazo razonable en la investigación y el formal procesamiento de los probables responsables de un delito, de conformidad con el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo cual ha sido expuesto en las sentencias de los casos: López Álvarez vs. Honduras de fecha 1 de febrero de 2006 y caso Acosta Calderón vs. Ecuador, sentencia de 24 de junio de 2005, numeral que a la letra dice:

La Corte ha establecido que el acceso a la justicia se encuentra consagrados en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El artículo 8.1 del Pacto de San José de Costa Rica dispone:

“Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o autoridad competente, independiente e imparcial, establecida con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.”

En los casos anteriormente señalados, la Corte Interamericana de Derechos Humanos explica la necesidad de que las autoridades actúen con diligencia, con el objeto de tutelar eficazmente los derechos humanos de víctimas, ofendidos y los probables responsables; por lo que resulta inconcebible que en casos como el que hoy se resuelve, el representante social no procure que las diligencias que tienen que desahogarse se lleven a cabo de forma pronta y que, por otra parte, teniendo las facultades necesarias para imponer medios de apremio durante su investigación para llevar a cabo la correcta integración de su investigación, decidan no hacerlos efectivos violentando de esta forma el derecho del ofendido a obtener justicia pronta y expedita y, de igual forma, faltando a su obligación de procurar que el gobernado tenga acceso a la justicia.

La falta de imponer los medios de apremio durante la investigación viene al caso debido a que giró oficio de investigación a la Dirección de Policía Ministerial del Estado y a ocho meses después aproximadamente, el titular de dicha corporación policíaca no le ha rendido el informe derivado de la investigación solicitada.

Así pues, al respecto el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece:

“...La investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público,

el cual se auxiliará con una policía que estará bajo la autoridad y mando inmediato”.

Ante ello, el agente social en cita es la instancia competente para llevar a cabo la investigación y persecución de los delitos, facultad que en el caso que nos ocupa omitió realizar con la eficiencia y eficacia debida.

Por lo anterior, se advierte una total apatía, desinterés, ineficiencia y negligencia en torno a las funciones del licenciado AR1, respecto la averiguación previa 1 que como agente del Ministerio Público debe desempeñar para efecto de esclarecer la verdad histórica de los presuntos hechos delictivos que le fueron puestos de su conocimiento.

Así pues, el hecho violatorio analizado y que dio origen a la presente resolución es de suma importancia que este organismo estatal de protección y defensa de derechos humanos se pronuncie en relación al acceso a la justicia que toda persona debe tener y que es un derecho fundamental, bajo la garantía de la igualdad de trato ante la ley y la no discriminación, que posibilita a todas las personas, incluyendo aquéllas pertenecientes a los sectores más vulnerables, el acceso al conocimiento, ejercicio y defensa de sus derechos y obligaciones, mediante servicios cercanos, cuáles?, no olvidemos que uno de los papeles importantes del Ministerio Público que es el representante de la sociedad y de las víctimas del delito.

La postergación material y procesal de la víctima no puede sostenerse por mucho tiempo, el sistemático olvido de quien ha padecido en primera persona las consecuencias del delito choca frontalmente con su derecho a la tutela judicial efectiva, porque no puede considerarse efectiva la respuesta judicial frente a quien vulnera la ley penal si se hace en detrimento o con olvido de la víctima.

Sobre el particular, instrumentos internacionales establecen lo siguiente:

Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre:

“Artículo XVIII. Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo, debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia la ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.”

Declaración Universal de Derechos Humanos:

“Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los

tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.”

Incumple también lo señalado en el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, adoptado por los Estados Unidos Mexicanos, el 17 de diciembre de 1979, que en sus artículos 1º y 2º refieren lo siguiente:

“Artículo 1º. ...los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en todo momento los deberes que les imponen la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión.

Artículo 2º. ...En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los Derechos Humanos de todas las personas.”

Las Directrices sobre la Función de los Fiscales:

“11. Los fiscales desempeñarán un papel activo en el procedimiento penal, incluida la iniciación del procedimiento y, cuando así lo autorice la ley o se ajuste a la práctica local, en la investigación de delitos, la supervisión de la ejecución de fallos judiciales y el ejercicio de otras funciones como representantes del interés público.

12. Los fiscales, de conformidad con la ley, deberán cumplir sus funciones con imparcialidad, firmeza y prontitud, respetar y proteger la dignidad humana y defender los derechos humanos, contribuyendo de esa manera a asegurar el debido proceso y el buen funcionamiento del sistema de justicia penal.”

La Declaración sobre Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder:

“Acceso a la justicia y trato justo.

4. Las víctimas serán tratadas con compasión y respeto a su dignidad. Tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido, según lo dispuesto por la legislación nacional.

5. Se establecerán y reforzarán cuando sea necesario, mecanismos judiciales y administrativos que permitan a las víctimas obtener reparación mediante procedimientos oficiales u oficiosos que sean expeditos, justos, poco costosos y accesibles. Se informará a las víctimas de sus derechos para obtener reparación mediante esos mecanismos.”

DERECHO HUMANO VIOLENTADO: Derecho a la legalidad

HECHO VIOLATORIO ACREDITADO: Prestación indebida del servicio público

Los actos de la administración pública se deben realizar con apego a lo establecido por el orden jurídico a efecto de evitar que se produzcan perjuicios indebidos en contra de sus titulares.

El principio de legalidad significa que los actos y comportamientos de la administración deben estar justificados en una ley previa, que preferible pero no necesariamente ha de ser de carácter general. Se trata, desde luego, del cometimiento en primer lugar a la Constitución Federal, pero también al resto del ordenamiento jurídico, por ejemplo a las normas reglamentarias emanadas de la propia administración, lo que ha sido dado en llamar el bloque de la legalidad o principio de juricidad de la administración.

Como puede advertirse entonces, el principio de legalidad enmarca y limita otros conceptos jurídicos, tales como el de discrecionalidad, que cabe ser entendida no como actividad libre de la ley, sino como actividad que la propia ley confiere y por tanto guía y limita, sometiendo además al necesario control judicial amplio, determina también el alcance y aplicación de los denominados conceptos jurídicos indeterminados, uno de los cuales es el de urgencia, supuesto en el cual estamos lejos de encontrarnos en la problemática que ahora se resuelve.

Con lo anterior solo se pretende dejar claro que las autoridades actúen al margen de la ley, en el pleno y debido cumplimiento de sus funciones; que las autoridades siempre funden y motiven su proceder, situación que por supuesto no aconteció en el caso que nos ocupa, ya que la falta de diligencias en la indagatoria penal ya referida ha causado agravios a la señora QV1, particularmente al derecho a obtener justicia.

A ese respecto, la garantía de fundamentación consiste en que los actos que originan la molestia que señala el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben basarse en una disposición normativa general; es decir, que ésta prevea la situación concreta para la cual sea procedente realizar el acto de autoridad, que exista una ley que lo autorice.

La garantía de motivación de la causa legal del procedimiento implica que, existiendo una norma jurídica, el caso o situación concretos al respecto de los que se pretende cometer el acto autoritario de molestia, sean aquellos a que alude la disposición legal. En sí la motivación representa el señalar las condiciones de hecho o de derecho por las que se emitió el acto a las cuales les es aplicable un precepto legal, implica el precisar razones congruentes del porqué de su actuación.

La exigencia de fundar legalmente todo acto llevado a cabo por las autoridades llevan a diversas obligaciones, que se traducen en condiciones tales como que el órgano del que tal acto provenga esté investido con facultades expresamente consignadas en la norma jurídica; en que el propio acto se prevea en dicha norma; en que su contenido y alcance se ajusten a las disposiciones normativas que lo rijan y que dicho acto se contenga o derive de un mandamiento escrito, en cuyo

texto se expresen los preceptos.

Así, en un régimen constitucional como el nuestro, la valoración jurídica del proceder de un servidor público debe hacerse a partir de lo que la ley fundamental estatuya en cuanto a su competencia, análisis que debe ser complementado con lo que la legislación secundaria prevenga con relación a sus atribuciones, lo cual más adelante, en forma sucesiva, examinaremos los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los diferentes cuerpos normativos de la legislación secundaria que regulan el actuar de todo servidor público.

En el caso que nos ocupa, involucra al licenciado AR1, agente del Ministerio Público del fuero común de ****, Sinaloa, Sinaloa.

Con tal omisión por parte del servidor público, indudablemente transgredió lo dispuesto en los siguientes ordenamientos.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

“Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. Las Constituciones de los Estados de la República precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en los Estados y en los Municipios.”

Artículo 113. Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos, determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas.

Dichas sanciones, además de las que señalen las leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones a que se refiere la fracción III del artículo 109, pero que no

podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados”.

Constitución Política del Estado de Sinaloa:

“Artículo 130. Para los efectos de las responsabilidades contenidas en este Título, se entiende por servidor público toda persona física que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en alguno de los tres poderes del Gobierno del Estado, en los Ayuntamientos, así como en los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos del Estado y Municipios en los Ayuntamientos y organismos e instituciones municipales.

Todo servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente de la jerarquía, denominación y origen del cargo. Se concede acción popular para denunciar los delitos y faltas a que se refiere este Título, bajo la más estricta responsabilidad del denunciante y mediante la presentación de elementos de prueba”.

Numerales de los que claramente se desprende que servidor público es toda persona física que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en alguno de los tres poderes del Gobierno, así como en los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos del Estado y Municipios en los Ayuntamientos y organismos e instituciones municipales.

Aunado a lo anterior y de lo razonado en el cuerpo de la presente resolución se deduce que las conductas atribuidas a los servidores públicos de referencia pueden ser constitutivas de responsabilidad administrativa, de conformidad con lo previsto por los artículos 15, fracción XXVII y 34 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado.

De esa manera y particularmente el servidor público citado pasó por alto tanto leyes estatales, federales e instrumentos internacionales entre los que se encuentra el contenido de los artículos 1 y 2 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.

Ordenamientos de los que se desprende la obligatoriedad que tienen los servidores públicos de conducirse en el desempeño de sus funciones con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y respeto a los derechos humanos y, en contrapartida, el actuar fuera de estos supuestos necesariamente implica un exceso o deficiencia del empleo, cargo o comisión encomendado.

También se desprende la obligatoriedad que tienen los servidores públicos de conducirse en el desempeño de sus funciones con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y respeto a los derechos humanos, y en contrapartida, el actuar fuera de estos supuestos necesariamente implica un exceso o deficiencia del empleo, cargo o comisión encomendado, el cual deberá ser sujeto del inicio de una investigación administrativa de parte del órgano de control interno de la institución respectiva.

Por todo lo anterior y como consecuencia de ello, es necesario que tales hechos sean investigados por el correspondiente órgano interno de control y de ser procedente se apliquen las sanciones administrativas que conforme a derecho procedan de manera independiente de la responsabilidad penal en que pudieran haber incurrido.

Así entonces el servidor público en cita, ha contravenido los artículos 14 y 15, fracciones I y XXVII de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa e incumplido a su obligación en observar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, así como de cumplir con eficiencia el servicio que se les ha encomendado.

Por lo anterior, es pertinente se inicie el procedimiento administrativo disciplinario y de investigación por parte del Órgano de Control Interno de la Procuraduría General de Justicia, conforme a lo dispuesto por dicha Ley de Responsabilidades, a efecto de que se dé seguimiento al presente caso, se aporten los elementos que den lugar al esclarecimiento de los hechos y en su oportunidad se impongan algunas de las sanciones que contemplan dichos ordenamientos jurídicos.

Con base en lo expuesto anteriormente y al tener como marco el artículo 1º de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, que precisa como objetivo último en nuestra entidad federativa la protección de la dignidad humana y la promoción de los derechos fundamentales que le son inherentes, así como al artículo 4º Bis, segundo párrafo, que afirma que los derechos humanos tienen eficacia directa y vinculación a todos los poderes públicos, esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa de manera respetuosa se permite formular a usted, señor Procurador General de Justicia del Estado de Sinaloa, como autoridad superior jerárquica, las siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA. Instruya al agente del Ministerio Público del fuero común de Estación, Naranjo, Sinaloa, Sinaloa, encargado de integrar la averiguación previa 1, para que dentro de la misma lleve a cabo con la mayor brevedad y en estricto apego a los principios de legalidad, protección social, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos que siempre deben regir la actuación de dicha

institución, las diligencias que técnica y legalmente resulten procedentes y de las que producto de éstas resulten necesarias para su debida integración y conforme a su resultado emitan la resolución que en Derecho corresponda.

SEGUNDA. Instruya a la Unidad de Contraloría Interna de esa Procuraduría General de Justicia del Estado a efecto de que inicie procedimiento administrativo en contra del licenciado AR1, agente del Ministerio Público del fuero común en ****, Sinaloa, Sinaloa, respecto a la dilación en que se incurrió, según lo referenciado en el apartado de observaciones, y una vez demostrada la responsabilidad administrativa en que a juicio de esta Comisión incurrió, se le apliquen las sanciones conforme lo dispone la citada ley.

TERCERA. Se giren instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se imparta al personal de la agencia del Ministerio Público del fuero común de Sinaloa, Sinaloa, Sinaloa, cursos de capacitación que les permita discernir los principios que rigen a esa institución y a su vez aplicarlos a casos concretos, para así brindar a los gobernados que requieren de sus atenciones una verdadera y pronta procuración de justicia y, desde luego, con estricto respeto hacia sus derechos humanos.

CUARTA. Se le brinden a la agraviada, los beneficios que la Ley de Protección a Víctimas y Ofendidos del Delito para el Estado de Sinaloa, le otorga en su condición de víctima.

VI. NOTIFICACIÓN Y APERCIBIMIENTO

La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene el carácter de pública y se emite con el propósito fundamental, tanto de hacer una declaración respecto de una conducta irregular cometida por servidores públicos en el ejercicio de las facultades que expresamente les confiere la ley, como obtener la investigación que proceda por parte de las dependencias administrativas o cualquiera otra autoridades competentes para que, dentro de sus atribuciones, apliquen las sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que se trate.

Notifíquese al licenciado Marco Antonio Higuera Gómez, Procurador General de Justicia del Estado de Sinaloa, de la presente Recomendación, misma que en los archivos de esta Comisión quedó registrada bajo el número 50/2014, debiendo remitírsele con el oficio de notificación correspondiente una versión de la misma con firma autógrafa del infrascrito.

Que de conformidad con lo estatuido por el artículo 58 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, dentro de un plazo de cinco días hábiles computable a partir del día hábil siguiente de aquél en que se haga la notificación

respectiva, manifieste a esta Comisión si acepta la presente Recomendación, solicitándosele expresamente que en caso negativo, motive y fundamente debidamente la no aceptación; esto es, que exponga una a una sus contra argumentaciones, de modo tal que se demuestre que los razonamientos expuestos por esta Comisión carecen de sustento, adolecen de congruencia o, por cualquiera otra razón, resulten inatendibles.

Todo ello en función de la obligación de todos de observar las leyes y específicamente, de su protesta de guardar la Constitución lo mismo la General de la República que la del Estado, así como las leyes emanadas de una y de otra.

También se le hace saber que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tuvo una importante reforma en materia de derechos humanos la cual fue publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el pasado 10 de junio de 2011.

El segundo párrafo del apartado B del artículo 102 de la misma, expresamente señala hoy día:

“Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les presenten estos organismos. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.”

Asimismo lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su reforma de fecha 10 de junio de 2011, que menciona en su artículo 1° que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

En consecuencia, aquellas autoridades a quienes se les dirija una Recomendación de parte de esta autoridad constitucional en derechos humanos, deben constreñirse a señalar que tiene por aceptada o no dicha Recomendación, más no señalar que la aceptan parcialmente.

En ese sentido, tanto la no aceptación como la aceptación parcial, se considera como una negación al sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos previsto en los artículos 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1° Bis y 77 Bis de la Constitución Política del Estado, ya que se traduce en la no aceptación del mencionado pronunciamiento.

Esta posible actitud de la autoridad destinataria evidenciaría una falta de compromiso con la cultura de la legalidad, así como a una efectiva protección y defensa de los derechos humanos y en consecuencia demuestra también el desprecio a la obligación que tienen de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con lo que establece el artículo 1° de la Constitución Nacional.

En este orden de ideas, las recomendaciones emitidas por los organismos públicos defensores de los derechos humanos del país, requieren, además de la buena voluntad, disposición política y mejores esfuerzos de las autoridades a quienes se dirigen, ser aceptadas y cumplidas conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, reconocidos en el párrafo tercero, del multicitado artículo 1° constitucional.

Es importante mencionar que de una interpretación armónica al artículo 58 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y 100, párrafo tercero del Reglamento Interno de la misma, cuando una autoridad o servidor público acepta una recomendación, asume el compromiso de dar a ella su total cumplimiento.

Ahora bien y en caso de aceptación de la misma, deberá entregar dentro de los cinco días siguientes las pruebas correspondientes a su cumplimiento.

La falta de presentación de pruebas dará lugar a que se interprete que la presente Recomendación no fue aceptada, por lo que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos quedará en libertad de hacer pública precisamente esa circunstancia.

Notifíquese a la señora QV1, en su calidad de quejosa, de la presente Recomendación, remitiéndole con el oficio respectivo un ejemplar de esta resolución con firma autógrafa del infrascrito para su conocimiento y efectos legales procedentes.

EL PRESIDENTE

DR. JUAN JOSÉ RÍOS ESTAVILLO